

el aprecio de la familia. Por eso cuando se ofreció a arreglar el asunto, la creyeron. "Confiamos en que iban a hacer algo, pero ella siempre lo minimizó. ¿Cómo no va a ser *bullying* cuando la víctima siempre es la misma?", se pregunta Amezcua, que esta semana, aunque sigue con sus viajes diarios entre Zaragoza y Teruel, está "de subidón" al ver que su hija vuelve a caminar.

Cuando una de las niñas le reclamó que fuese una chivata, Saray estalló y se peleó con ella. Los padres intentaron entonces contactar con la directora. Fue en vano. "No tenía citas, no estaba... Así que mi mujer se fue a hablar con las niñas y logró que le pidieran perdón a Saray", agrega el padre. Pero los abusos siguieron en pequeñas dosis: unos guantes que aparecían mojados, un libro que desaparecía... El suceso que dejó tocada a la niña llegó pocos días antes de final de curso. En el patio, las agresoras la cogieron por el cuello, le bajaron la cabeza y la agredieron, según la familia. La tutora "se disculpó de mil maneras", dice Amezcua, y prometió actuar. Pero nada se movió y llegó el verano.

"Hay que actuar"

Tras el intento de suicidio, la escuela Agustín Gerico lamentó lo ocurrido, dio "las gracias a Dios porque la niña esté fuera de peligro" y afirmó que había recibido una "especial atención" de los profesores para "su mejor integración". En ningún momento menciona el supuesto acoso sufrido por la niña, que para la escuela sigue siendo un tabú. El centro ha dicho que abrirá "los protocolos necesarios, si fuera conveniente" y se ha puesto a disposición de los investigadores. EL PAÍS ha intentado conversar con la dirección del centro, sin éxito.

La presunta pasividad del centro concertado ha merecido el reproche del consejero de Educación de Aragón, Felipe Faci. "Vamos a investigar qué ha pasado y por qué no se ha abierto el protocolo. No hay que esperar a tener certezas para hacerlo. Cuando un alumno se siente acosado, hay que actuar", afirma Faci, que ha ofrecido su apoyo a la familia. El lunes posterior a los hechos, Educación ya instó al colegio a abrir los protocolos contra el acoso y de ideación suicida.

A la investigación administrativa se suma la de la policía, que ha entrevistado a Saray y ha analizado su teléfono móvil por si hay rastros de ciberacoso. Los agentes trasladarán sus conclusiones a la fiscalía de menores, que con toda probabilidad archivará el caso porque se trata de menores de 14 años y, por tanto, inimputables. Cuando esto se consume, el abogado de la familia, Miguel Lasnada, prevé actuar por la vía penal y civil por la actuación negligente del colegio.

Saray va a cambiar de escuela. Amezcua subraya la injusticia de que sea "la víctima y no el victimario" quien deba moverse, pero cree que es mejor así. Con los pleitos que están por venir, el hermano mayor también se irá. Lo primero, dice, es lograr el alta médica y mantener una conversación sosegada con la niña, en casa. "Confío en ella. Cuando esté preparada, me hablará".



Algunos de los manifestantes que marcharon ayer por el centro de Madrid. / ANDREA COMAS

Una protesta en Madrid recuerda a las 35.000 personas que han fallecido internadas en la pandemia y reclama un nuevo modelo en el sector

"Verdad, justicia y reparación" para los que murieron en las residencias

MARÍA SOSA TROYA, Madrid
La bulliciosa plaza de Callao, en Madrid, enmudeció ayer durante un minuto. Esos 60 segundos de silencio, en los que solo se escuchaba la melodía de *El Cant dels ocells*, han sido un homenaje para las cerca de 35.000 personas que vivían en residencias, de mayores o discapacidad, y han fallecido desde el inicio de la pandemia, contagiadas de covid o con síntomas de la enfermedad. Así culminó una protesta fruto de la indignación y el hartazgo, convocada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuaris de Residencias, que agrupa a 19 asociaciones de 11 comunidades. Asistieron 5.200 personas, según los organizadores: 1.500, según la Delegación del Gobierno en Madrid. La marcha transcurrió al grito de "¡Basta ya!", en contra de la "reiterada vulneración de los derechos humanos y fundamentales" de los usuarios y para exigir otro modelo de cuidados. Uno con más personal e inspecciones, con centros más pequeños y en el que "se combata" la "obscura privatización del sector".

"Más personal y menos negocio", gritaron los asistentes durante la marcha. "Juzgado y Fiscalía, seréis viejos un día", se oía. "Verdad, justicia y reparación". Entre los participantes, Sagrario Mancebo (61 años) cuenta que su madre vive en una residencia privada de la Comunidad de Madrid, en una plaza concertada porque es gran dependiente. Allí también vivía su padre, pero falleció. "El siempre protestaba por la falta de personal, por las comidas". Cinta Martín lleva un cartel con la foto de una señora en el que se lee "Si importa". "Era mi madre", explica. Murió en una residencia de Sevilla, al principio de la pandemia. "Cuando no había test, no sabemos de qué", añade. "Estoy aquí por los que estuvieron y ya no están, y por los que estaremos. Hay que cambiar el modelo".

Esta es la primera manifestación con vocación estatal desde 2019 y los organizadores la calificaron de "histórica". La anunciaron en junio, cuando el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas (las competentes en la materia) aprobaron un acuerdo para cambiar el modelo de cuidados que los convocantes, si bien reconocen un avance, consideran muy insuficiente. Los sindicatos CCOO y UGT han apoyado la protesta, y también la secundó Marea de Residencias, el otro gran movimiento que agrupa a familiares. "Aquí está hoy despierto el pueblo, el pueblo dolido, herido, advirtiendo a la sociedad y a las administraciones que no dejaremos que la historia vuelva a arrinconar, a abandonar a las personas más vulnerables e indefensas", sentenciaba el manifiesto que la periodista Rosa María Artal leyó al final de la manifestación.

En él se enumeraba una larga lista de razones por las que dicen "basta". Entre ellos, "la conculcación de derechos humanos" de los usuarios y "de los derechos laborales de las trabajadoras", "la inexistencia de personal suficiente", "la deficiente atención médica", "la alimentación esca-

Los manifestantes clamaron contra "la obscura privatización"

Apenas un puñado de casos siguen activos en los juzgados

sa, pobre, mezquina", "la ausencia de servicios de inspección" y las "continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras". Por ello, los manifestantes llamaron a la sociedad a exigir "a las comunidades autónomas un cambio de actitud y de talante que derive en la conformación de un nuevo modelo de residencias", que se aleje del actual "caduco e impropio de una sociedad avanzada".

Cantantes como Joan Manel Serrat y Miguel Ríos habían llamado a unirse a la manifestación, y durante el recorrido, y al final, se escucharon sus canciones. Una mujer proveniente de

Galicia, que prefería no dar su apellido, reclamaba que el "cuarto pilar del Estado de bienestar" se haga efectivo.

Las organizaciones de familiares y usuarios de residencias han proliferado en los últimos años, pero con la pandemia el movimiento ha ganado fuerza. Estos centros fueron el gran foco en los primeros meses de crisis sanitaria. Entonces, la cifra de muertos iba escalando día tras día, e entre noticias de mayores que morían sin recibir la atención médica adecuada. En la Comunidad de Madrid hubo un protocolo que restringía la derivación hospitalaria de personas con gran dependencia o discapacidad. En otras autonomías, como Cataluña, son múltiples los testimonios de trabajadores, directores de centros y familiares que corroboran que también se denegaron traslados.

Los intentos de que hubiera comisiones de investigación se han visto frustrados y de la cantidad de casos que han acabado archivados. De las 441 diligencias de investigación abiertas entre 2020 y 2021 por los fiscales, 414 terminaron en archivo. "Los casos que continúan son una gota en el océano", critica Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, asociación madrileña. "Después de esta hecatombe parece que no se hubiera aprendido nada. Lo ocurrido ha sido consecuencia de una pandemia, pero también de un modelo de residencias que ha hecho aguas por todos lados", denuncia.

"La sociedad no puede seguir mirando para otro lado", sostiene María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora 5+1. En el manifiesto los convocantes lanzaban un "mensaje inequívoco", "ya no tenemos fuerzas para rendirnos". Desde el escenario, Carcelén insistía: "Este es el comienzo. No nos vamos a cansar. Rendirse no es una opción".